

# CENTROAMERICA: LA TRANSICION AUTORITARIA HACIA LA DEMOCRACIA

Por EDELBERTO TORRES-RIVAS

## SUMARIO

- I. LA GUERRA O EL FRACASO DE LA POLÍTICA.—II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ÉPOCA DE CRISIS.—III. LA FUNCIÓN HISTÓRICA DE LOS PARTIDOS.—  
IV. PARTIDOS Y PACTOS CORPORATIVOS.

Centroamérica exhibe hoy día una variedad de experiencias políticas que tienen en común la búsqueda de alguna modalidad de vida política democrática. Los procesos electorales pueden ser un testimonio práctico de ese esfuerzo. También empieza a existir la ilusión cierta de que sea éste un punto de partida para alguna forma de crecimiento con desarrollo. El estancamiento de todos estos años es tan grave como la guerra o la dictadura, y sin cambios profundos en la desigual estructura del reparto de la riqueza social no habrá ni paz ni democracia. Los déficits sociales son agudos.

De todas maneras, hay una etapa en la vida de toda sociedad en la que los conflictos y las oposiciones sociales pueden y deben ser reguladas. En que el conflicto que unas veces dinamiza la vida social y económica termina por ser factor de estancamiento y crisis. La posibilidad de acuerdos o transacciones aparece en la experiencia histórica directamente vinculada a la instalación de regímenes democráticos. Los antecedentes de esta posibilidad son múltiples, pero aparecen asociados a alguna forma de modernización y cambio. Los regímenes políticos dan paso a formas democráticas porque pueden establecer y respetar normas destinadas a enfrentar el conflicto social y a re-

solverlo. Sin esa condición, ninguna estructura democrática es posible, cualquiera que sea la definición que se intente proponer.

No es ésta ninguna propuesta teórica, sino una simple comprobación empírica que tanto es útil para comprender los procesos de «transición» que se viven en Centroamérica como para examinar las precondiciones para el establecimiento de sistemas democráticos en cualquier latitud o época. El punto de partida tiene que ser la noción de qué tipo de democracia es posible ir construyendo en una transición que se origina desde estructuras autoritarias aún vigorosas, de larga duración; de regímenes despóticos que acompañaron constitutivamente el surgimiento de los Estados nacionales y, por añadidura, que en los últimos años han experimentado prácticas, valores e ideologías que refuerzan y justifican la aplicación de la fuerza, la arbitrariedad y lo particularístico, en esta etapa de contrainsurgencia, como ha sucedido en Guatemala y El Salvador, o de guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua. Los desafíos de la transición son múltiples.

En otras palabras: se trata de una transición sin desenlace previsible. Es como empezar a construir un puente, con escasez de materiales, ladrillo a ladrillo, sin ver todavía la otra orilla. Existe la voluntad y se ha empezado. Pero vale la pena recordar que, en la experiencia de tres países centroamericanos, lo autoritario que se intenta superar no solamente es una estructura política, sino una manera de ser de toda la sociedad y su sistema de dominación incluido. No es el Gobierno el que ha experimentado una ETAPA AUTORITARIA que entra en crisis. En Sudamérica, la transición es una recomposición democrática, apoyada en fuerzas y tradiciones del pasado más o menos inmediato, que conservaron vida, prestigio y esperanzas. En esas sociedades, la transición es como una respuesta frente al fracaso de los populismos, que en Centroamérica no existieron, ni tampoco se explica lo autoritario como la necesidad de ordenar el crecimiento económico y así disciplinar la mano de obra para proseguir o asegurar la profundización del capitalismo (propuesta por la teoría de lo burocrático-autoritario).

Si lo autoritario tiene un carácter *orgánico*, su sustitución no corresponde simplemente a una crisis coyuntural política, sino a un largo proceso de luchas que en Centroamérica se asocian a la crisis del orden oligárquico, tantas veces estudiadas, y a las batallas políticas por su modificación. La transición, si así puede hablarse, constituye, en consecuencia, un largo proceso de luchas que se exacerban desde 1975-1977 y significan enfrentamientos armados, violencia estatal y respuestas populares de similar magnitud. ¿La guerra civil se convierte en una de las modalidades de la transición a la democracia? Es difícil imaginarlo, y más bien sucede que la democracia puede terminar a consecuencia de una guerra civil. La victoria del sandinismo y su reciente

derrota electoral es parte de esa búsqueda. También lo son los procesos de negociación, la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, las propuestas de concertación y diálogo, los procesos electorales, etc. Son todos mecanismos indirectos de un proceso histórico que, en todo caso, ya está ocurriendo.

La democracia tanto puede ser un tipo de régimen político como una determinada forma de sociedad. Aquí nos interesa más lo primero, que luego facilita lo segundo. Es más fácil alcanzar un régimen político democrático que una sociedad que también lo sea. Pero ni uno ni otro puede ser asumido como un tipo ideal extraído de múltiples experiencias históricas. Por el contrario, asumimos un punto de partida intermedio. Ya se trate de un conjunto de instituciones o de prácticas, sea una herramienta para facilitar la toma de decisiones por la mayoría o un medio para construir el consenso, sea un programa reivindicativo, lo que resulta imprescindible es que se trate de un proceso de modificación, de cambio, que asegure que los conflictos de intereses, las luchas reivindicativas, puedan conducir a nuevas formas de participación política, de integración social, de representación.

*La democracia posible* no es un concepto teóricamente deducido, sino una propuesta política históricamente referida. Es la estructura política resultado de las luchas, acuerdos, enfrentamientos y pactos explícitos o no, de fuerzas sociales que se proponen ir más allá de las formas políticas existentes, como un esfuerzo utópico razonable (como programa o proyecto), para modificar las relaciones políticas, la forma de hacer política y volverla democrática, es decir, tolerante, persuasiva, competitiva. Es la modificación de las relaciones del Estado (sus instituciones y funcionarios) con las organizaciones e individuos de la sociedad. La democracia posible significa, en el entorno centroamericano, un cambio en la interacción entre gobernantes y gobernados, para que la dominación política se disimule en sus aspectos hoy día brutales de coerción y violencia y mejoren hasta donde los recursos del proceso se lo permitan. En el centro de la idea de *democracia posible* está el conflicto social que la amplía y la lleva hasta sus límites históricos. No se busca la unidad; es la diversidad de fuerzas sociales, cuyos conflictos pueden y deben llevar al consenso.

## I. LA GUERRA O EL FRACASO DE LA POLITICA

No puede negarse que la guerra es la continuación de la política POR OTROS MEDIOS. El *dictum* de Clausewitz no puede ser puesto en duda solamente a condición de atender el discurso en el que él mismo se produce. Los otros medios constituyen, en su utilización y desarrollo, el fin del diálogo.

Los medios de que se vale la política para hacer la guerra constituyen el fracaso de la manera de hacer política. O tal vez propiamente de una manera particular de hacerla: la conducta colectiva que se mueve en el espacio de LO PÚBLICO, donde el poder legítimo se construye como ejercicio de dominación y de competencia por controlarla, según reglas establecidas. Esta manera de hacer política tiene previsiblemente dos parámetros institucionales: uno, *el Estado*, como depositario del poder por el que se lucha, y otro, *el partido*, como la organización instrumental de la voluntad de poder (que se defiende o pretende). Ello supone un escenario común y una racionalidad compartida por quienes contienden. Es la forma de hacer política en un escenario democrático liberal: es el interjuego de los partidos, la práctica del sufragio, de lo legal y de lo público aceptando formar parte de una estrategia de orden, de permanencia.

Las cosas son distintas cuando se practica la política en una sociedad autoritaria, represiva. Hacer política en las condiciones de dictadura es luchar por la democracia, empezando por la electoral, y ello plantea de inmediato una ruptura, una discontinuidad en que el escenario deja de ser el mismo y la competencia se transforma, lenta o rápidamente, en lucha mortal. La referencia al partido se altera y su conducción se vuelve subversiva, y entonces hacer política es el desorden, es introducir el caos permanente, el tratar de empezar en el sentido que lo autoritario es la disciplina, el orden, el tratar de terminar. Hacer política es romper con la continuidad y volverla crítica. La política, en situaciones de crisis, es hacer de la crisis una expresión política: la lucha contra el orden es la lucha contra el sistema, contra lo previsible, que radica siempre en una condición de fuerza. En última instancia, ésta aparece con un despliegue total de sus múltiples posibilidades ofensivas. Es el momento de la guerra.

En esta perspectiva, la política se realiza para negarse. La explicación psicologista, disfrazada de teoría, dice que la política es el triunfo de la racionalidad sobre los instintos, y la guerra, el desenfreno de los mismos, de la emoción desbocada. Está aquí la noción hobbesiana del orden y la legitimidad, logrado por una fuerza superior que se impone al conjunto de propietarios para evitar una guerra de todos y entre todos. Se acepta la limitación de la libertad que el ordenamiento estatal propone en nombre del individuo, cuya realización (como propietario) hay que garantizar. Pero la dictadura no define hacer la política de la manera prevista. La hace de otra manera, vaciándola de sus contenidos, despolitizando la vida pública, obligando forzosamente al desinterés por el poder, y con ello, redefiniendo los espacios de la vida cotidiana. Conduce a la pasividad o a la resistencia, en ambos casos a una situación límite, total.

En estas condiciones surgió la guerra en Centroamérica, definida propiamente como un conflicto armado en que fuerzas sociales polarizadas recurren a la fuerza para alcanzar objetivos claramente identificados, como intereses de clase. La guerra civil es siempre una forma de lucha de clases. Es su expresión mayúscula. No se conduce como una guerra entre naciones, y por ello su lógica es distinta. Lo que define a la política es que la lucha por el poder se realiza por medios políticos; tal como lo propone S. LÓPEZ (LÓPEZ, 1987: 4); que la lucha por el poder se realice por medios políticos define la política; que ella se haga por medios militares define la guerra. ¿Qué es lo que hace que la guerra sea la continuidad de la política: el cambio de medios o el cambio de fines? En las condiciones de la sociedad centroamericana, con la crisis del poder oligárquico y su manera de hacer política, el hacer la guerra constituye su más evidente fracaso. Los medios cambian, pero también el fin. Se busca la destrucción política de una clase que se reveló incapaz para organizar la sociedad sobre bases democráticas. Se habla del fracaso de la política que el autoritarismo oligárquico no permitió. Que la dictadura impidió.

Con otros propósitos, Delich sentencia que la dictadura se instala siempre en el límite de la política (DELICH, 1982: 131). Esta clausura de la política implica restricciones a la sociabilidad (solidaridad), como desmovilización; la despolitización del Estado, para dar la imagen de que su naturaleza es esencialmente administrativa, técnica, instrumental, y la despolitización de la política como componente ideológico, finalmente, supone el monopolio del discurso, que, a la larga, conduce a la monotonía y al silencio. Se trata, propiamente, de argumentos poderosos a favor de un componente básico de la estructura autoritaria: hacer la política de otra manera, concentrándola en el Estado, reduciéndola al ámbito de lo público estatal (olvidando esa dimensión importante de la democracia, que es lo público no estatal), politizando de manera negativa las experiencias de la sociabilidad, que es como decir reduciendo las luchas políticas a un discurso autoproclamado del poder.

La lucha contra la dictadura no es, por ello, directamente la tensión por construir la democracia. El espacio que existe puede llamarse transición para retomar la imagen física de un punto de partida que conduce a algo. No olvidemos que existió y aún perdura en Centroamérica la mediación de la guerra. Lo que hemos llamado la transición ocurre aquí aun en momentos en que el conflicto político continúa y utiliza recursos de violencia. El espacio y las luchas por la democracia, que han sido reiteradas e importantes en algunos de los países bajo dictadura militar, no condujeron a la democracia, sino a la crisis. Si la dictadura desvaloriza la política no logra evitarla; la lucha por superar la estructura autoritaria vuelve externa la política a sus referentes contemporáneos: el Estado y el partido. Se hace la guerra por encima o al

lado de(los) partido(s). Surge otra forma orgánica, y no en referencia al Estado, sino en abierta contradicción con el poder, para destruirlo. Es éste el sentido que tiene el fracaso de la política en condiciones de guerra o de violencia política permanente.

## II. LOS PARTIDOS POLITICOS EN EPOCA DE CRISIS

Constituye una verdad de sentido común que los partidos políticos tengan hoy día una posición privilegiada con relación a otras formas organizativas en la sociedad o en relación con el Estado. La significación del funcionamiento de los partidos tiene, en consecuencia, una extrema variabilidad, que depende de contextos nacionales en los que el conflicto social o meramente los intereses sociales son institucionalizados, captados o reprimidos. Es decir, de la capacidad de institucionalizarlos a través de mecanismos previstos para que no devengan en conflictos/enfrentamientos políticos. La previsibilidad frente a tales eventualidades es lo que da el carácter democrático o no a una sociedad. En ese sentido, la existencia de un sistema de partidos pasa a constituir una condición del carácter democrático de esa sociedad.

Dada la historia centroamericana en general, y en particular en aquellas sociedades nacionales donde han imperado largas situaciones de dictadura, la naturaleza política del partido político se debilita. La razón elemental de este decaimiento es que esa naturaleza íntima está dada por la doble condición del poder por el que se lucha y la manera cómo éste se ha constituido (1). En otras palabras: el partido desempeña su condición de tal en la sociedad contemporánea cuando se constituye como un «agente» de solidaridades e identificaciones colectivas frente al Estado y cuando al transformarlas o redefinirlas las convierte en demandas políticas.

En situaciones de dictadura, esta función de representación y mediación está debilitada, como lo prueban las llamadas «democracias de fachada» en Centroamérica, especialmente los regímenes políticos de Guatemala y El Salvador, entre 1960 y 1980-82, por períodos en Honduras y por largos trechos en la Nicaragua de los Somoza. En situaciones de crisis, ni la representación

---

(1) Los partidos agrarios-conservadores de los países escandinavos, por ejemplo, han estado en la oposición hasta cuarenta años, frente a una socialdemocracia firmemente arraigada en la sociedad, legitimada no sólo por las victorias electorales, sino por los cambios sociales que han modernizado tales sociedades. Aquellos partidos no han perdido su condición política por el hecho de no acceder al poder en tan largo período. Pero nadie dudaría de la naturaleza competitiva del poder y de la existencia de reales condiciones para luchar por el control del mismo.

ni la mediación del sistema político pueden constituirse. Hablamos de crisis, como ella ha sido definida en este período histórico de Centroamérica, como la crisis del poder oligárquico y del Estado, resultado de una movilización popular-revolucionaria (sujeto) que supone una coincidencia multclasista de masas armadas. La crítica de las armas desborda la violencia de la política y se transforma en violencia militar. La crítica del orden tradicional por medio de las armas es un resultado directo de la forma previa de hacer política bajo el dominio de los viejos y atrasados intereses agrarios. Se trata, evidentemente, de un proceso de descomposición sin retorno que es causa y efecto de la violencia, cuando la fuerza de la guerra dicta la naturaleza del conflicto. En estas condiciones es el funcionamiento del Estado mismo el que entra en crisis. Y los partidos políticos, por añadidura.

La crisis es, en consecuencia, también la de toda forma política de organización precedente. Y esto es más cierto para las fuerzas de izquierda que para los partidos de la derecha. Sin embargo, en general, cuando el descontento popular aumenta de tamaño y crece cualitativamente, es decir, cuando su radicalización aumenta, ello se expresa de manera original en la creación de *nuevas* formas de organización, espacios inéditos para la protesta (en el inicio, iglesias, toma de instituciones públicas, embajadas, en su posterior desarrollo, las calles de la ciudad y la montaña, el bosque, el barranco). En los hechos, la calidad del conflicto desborda la organización tradicional del tipo partido o sindicato, para ser sustituida por la creación de frentes de lucha, movimientos llamados con cierto eufemismo «organizaciones político-militares».

Ni aun en Costa Rica, donde la situación ha sido diferente, ha habido una democracia de partidos políticos. El régimen de partidos funcionó en este país antes de 1948 si se acepta que éstos son «Estados Mayores» sin tropa, agrupación de notables alejados de la «vil multitud» (THIERS) y hasta hace muy poco, un puñado de políticos reunidos por vínculos de parentesco y amistad, lo que le da continuidad precaria a una estructura ausente por abajo. Esta «estructura» corresponde ciertamente a la manera tradicional y oligárquica de la vida de los partidos común a toda Latinoamérica. Su surgimiento mismo fue problemático en Centroamérica en el momento de la Independencia (1821-1823), que revulsionó los intereses criollos. De la disputa por el libre comercio y las relaciones con la Iglesia, de la oposición de las provincias a Guatemala y algunos otros temas surgieron los partidos llamados «Liberal» y «Conservador», etiquetas sin referencia ideológica precisa y a la luz de la historiografía reciente, como expresión familiar, elitista, de diferencias económicas a veces difíciles de establecer (WOODWARD, 1974: 61-78).

Tales tiendas partidarias se mantuvieron sin solución de continuidad, salvo

cambiando de nombre en momentos de mimesis electoral. Contradictoriamente, la vida política del largo período oligárquico necesitó de la existencia de partidos como mera formalidad; el hecho que esta formalidad no haya estado ausente indica que en el sistema político era condición de participación para los miembros de la élite organizar una estructura mediadora, por provisional, cerrada y patrimonial que fuera. En Honduras y Nicaragua, el bipartidismo se mantuvo como la denominación permanente de dos facciones pugnaces en el interior de un pequeño grupo autorreclutante. La política era un asunto de clase y estuvo siempre viva y actuante entre intelectuales. Partidos Liberal y Conservador se mantienen como tal hasta hoy día en esos dos países. En los otros fue permanente la pretensión ideológica, pero con un ropaje cambiante. ¿Eran éstos realmente partidos? ¿Qué es lo que define un partido hoy día?

Nos interesa señalar con alguna precisión el papel de los partidos políticos en esta coyuntura, calificada por una nueva óptica para resolver la crisis: la recomposición del sistema político mediante el recurso electoral y un nuevo papel protagónico a la organización partidaria, la renovación de la «cohorte» gubernamental, en la que los militares aparezcan con menor visibilidad, aunque sin abandonar su función básicamente contrainsurgente, la apelación ideológica a valores democráticos como parte de una campaña destinada a desacreditar lo que no reúne los requisitos, en abstracto, de una democracia del tipo norteamericano.

Esta ola «democratizadora» pareciera reunir factores coyunturales internos e internacionales favorables. Se ha producido un apresurado regreso a la política de partidos y una revalorización del VALOR DE LO DEMOCRÁTICO en abstracto. Lo más importante es que nadie, ni aun las fuerzas sociales o políticas de mayor vocación autoritaria, se pronuncian en su contra. Coincide con el deterioro de los regímenes autoritarios en numerosos países del Cono Sur y con una generalizada creencia de que cualquiera que sean los problemas de la sociedad latinoamericana, el primero que debe ser resuelto es el problema político. En el terreno de la *política*, todos los otros problemas podrían encontrar respuesta. En el momento de la crisis económica, la cobertura democrática-liberal parece la más apropiada para enfrentarla en sus peores efectos sociales o para mayor eficacia de los instrumentos correctivos del ajuste. El último de estos factores es de origen interno, y tal vez por ello, el decisivo. Se origina y expresa en la voluntad de cambio, sea en relación a las «democracias de fachada» que acompañaron al despliegue de la contra-insurgencia (Guatemala-El Salvador), sea frente a Gobiernos militares, cuya ineficacia fue superior a su ilegitimidad (Honduras). O a la coincidencia del Frente Sandinista y un sector de la oposición, de que salvar la sociedad es

practicar la democracia para enfrentar los retos de la destrucción económica.

La voluntad democrática tiene raíces populares; la subordinación política y la arbitrariedad burocrática experimentada por amplios sectores sociales originó en parte la crisis en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Lo hemos dicho en otro momento: el escenario de la crisis estuvo dominado por las luchas democráticas frustradas y por la reincidencia en olvidar que la democracia burguesa, para ser estable, descansa en el control e integración de las clases subalternas. Por ello mismo resulta contradictoria la pasión, urgencia y recursos de la política exterior del Gobierno norteamericano por implantar regímenes democráticos, a través de la utilización del sufragio, de los partidos políticos, de la reinstalación de la legalidad (juricidad) de la autoridad, reconociendo como antes no lo hicieron la majestad propia de la función judicial y la naturaleza constituyente de la función legislativa. Como antes nada de esto funcionó bien, existe la inercia popular que compara y se satisface con poco.

De todas maneras, la vida política en toda la región ha colocado en el primer plano a los partidos políticos y a una lenta y contradictoria conformación de su sistema político, cuya legalidad y permanencia descansa en bases totalmente deleznable: el respaldo del ejército, el apoyo múltiple norteamericano, la adhesión siempre provisional de los grandes intereses económicos a aceptar los resultados del juego partidario. La crisis política, que no ha sido superada en ningún país, filtra sus efectos a contrapelo de las intenciones de quienes afirman la posibilidad democrática. Pero lo primero que hay que recordar es que la existencia de partidos no es señal segura del lugar y la importancia que puedan tener como el instrumento democrático para articular el descontento social y la gestión del conflicto. La tentación corporativa se agiganta en épocas de crisis. A ello se agrega que los nuevos partidos se constituyen en referencia al Estado y con un débil anclaje en la sociedad, tal como sucede en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es decir, más como mecanismo del Estado que de la sociedad, y por ello no como partidos, que son instrumento de la integración nacional, sino mecanismos de la democracia política (LILIANA DE RIZ, 1987: 46).

Finalmente habría que establecer el grado en que la crisis política, especialmente en su dimensión de violencia anticampesina, ha roto las lealtades paternalísticas y ha desorganizado las redes tradicionales entre la comunidad campesina y su exterioridad política: la Iglesia, la filial partidaria; el comisariado militar, el terrateniente. Los partidos funcionaron con base en clientelas electorales que se originaron siempre en el seno de una estructura parternalística y jerárquica, que parecía pasar de padres a hijos y dar continuidad a vínculos que no permiten el ejercicio democrático de la libertad de elección.

En efecto, el paternalismo es un fenómeno de liderazgo en condiciones sociales muy atrasadas. Es por ello una forma de dominación social por la que quien lo ejerce otorga beneficios, compra lealtades para recompensar con influencias, distribuye favores para ganar voluntades, todo lo cual se hace en el marco de una cultura tradicional que da por implícita y natural esta condición. El cultivo del carisma forma parte de la relación social vinculante, que no tiene obligadamente que expresarse siempre en la vida política. La estructura paternal es a veces totalitaria en el sentido de abarcar toda forma de relación. La política centroamericana fue hasta hace poco una buena expresión de nuevas y viejas relaciones paternalísticas, incluyendo su componente de corrupción y arbitrariedad, pero sobre todo por la dificultad objetiva para que la identidad personal pueda corresponder a la existencia social y no quedar sepultada por nociones morales de gratitud, honor, favor y servicio.

Con todas las limitaciones señaladas, en Centroamérica ha habido en los últimos cinco años ocho elecciones presidenciales, incluyendo Panamá. Y tomadas en cuenta las reservas que puedan hacerse a alguna de ellas, en todos hay gobiernos civiles resultado de un sufragio en donde la abstención varió del 51,1 al 17 por 100, y en las cuales compitieron 55 partidos políticos.

### III. LA FUNCION HISTORICA DE LOS PARTIDOS

Cuando se argumenta que la guerra es el fracaso de la política casi se está pensando en los medios privilegiados de ésta, en sociedades donde el sistema político es sustancialmente sistema de partidos. La historia de Centroamérica exhibe, con respecto a esto, un sinnúmero de excepciones que la crisis política se ha encargado de subrayar en aspectos donde el protagonismo corresponde a las fuerzas de derecha o cuando ella es encabezada por las fuerzas de izquierda. Ambas tendencias del espectro, montañeses y girondinos, prescindieron del partido cuando se trata de hacer la defensa (y no la mera representación) de los intereses de clase que reclaman. Sólo los hombres del «pantano» son partidócratas. Los partidos de izquierda, y particularmente el Partido Comunista, quedaron sobrepasados con el desencadenamiento de la crisis después de 1975. Tal como lo indicamos en otro lugar (TORRES-RIVAS, 1986: 93), estos partidos fueron durante muchos años los representantes de la clase obrera y, por añadidura, de otros sectores subordinados. Proclamaron con conciencia programática la identidad de los intereses del proletariado con su accionar político al autojuzgarse vanguardia esclarecida de la clase. La izquierda centroamericana hasta antes de 1970 puede decirse que fue izquierda

marxista, y en este proceso de reduccionismo histórico, lo marxista en política era militancia comunista.

Hoy día advertimos que probablemente los Partidos Comunistas —llenos de experiencia clandestina, víctimas de la ferocidad policial, leales a las convicciones de la III Internacional— suplieron con abnegación y voluntarismo las lagunas que una defectuosa percepción histórica les venía produciendo: por un lado, olvidaron que el campesinado era la fuerza elemental subvertora del orden tradicional; por el otro, reconocieron con diverso grado de entusiasmo el papel dirigente que la burguesía estaba llamada a desempeñar en la renovación del orden oligárquico-colonial, encabezando frente al imperialismo las batallas por la soberanía nacional. La tragedia de estos partidos ha sido, paradójicamente, que conocieron y se enfrentaron primero a la oligarquía terrateniente, a su Estado y a sus recursos ideológicos antes que a la burguesía, exagerando por rechazo el papel que a ésta le asignaba la teoría. Cuando la crisis llegó, original como todo proceso revolucionario, planteó tareas y exigió alineaciones para las cuales no estaban preparados. Quedaron desarmados política y militarmente. En su lugar surgieron los movimientos políticos nacional-revolucionarios, encabezados por vanguardias político-militares.

Las fuerzas de derecha tuvieron organizaciones políticas, pero no programas precisos, ni siquiera alguna forma de articulación orgánica con una ideología congruentemente reaccionaria. Copiaron mal o se inspiraron peor en el franquismo español de los cuarenta y mantuvieron como eje de toda su actividad una campaña anticomunista. Eran como cruzados de la defensa religiosa, de la propiedad privada y portadores de una vaga posición anticomunista. En otras palabras: los partidos conservadores adoptaron el anticomunismo desde la segunda posguerra; de hecho, el anticomunismo lo matizó todo como una cerrada oposición a los cambios sociales. La prédica anticomunista se apoya no sólo en una visión maniquea de la sociedad, sino en una inversión del mundo real, y por ello constituye una fuente de alienación eficaz: en los procesos sociales, las posiciones políticas dejaron de corresponder totalmente a las formas diversas de existencia social, que son contradictorias. Pobres y ricos, explotadores y explotados pueden quedar unificados en una conducción anticomunista.

Cuando la crisis se desencadena, los Partidos Conservadores también quedaron sobrepasados por la fuerza de los hechos. Fueron inoperantes y retrocedieron para dejar en posición beligerante a otras formas de organización y de defensa del orden. De hecho, es el ejército y variadas formas paramilitares (financiadas o codirigidas por sectores empresariales) los que encabezan las luchas. Pero ya no es la política la que practican, sino la guerra. Hoy día, con todos los intentos de recomposición de fuerzas, la derecha tradicional em-

pieza a ser sometida a la prueba de las elecciones, y en la competencia por el apoyo popular no resultan de ninguna manera malparados.

Pero antes de tocar ese tema vale la pena señalar rápidamente la experiencia centroamericana de cómo los partidos son funcionales para la derecha en unos momentos y de cómo para otros son inoperantes. Por ejemplo: las batallas políticas más importantes —estrategias de ajuste estructural con ocasión de las presiones del Fondo Monetario, rechazo a la política impositiva y tributaria, legislación social y de servicios, política de empleo y salario y hasta la política exterior con ocasión de la seguridad y la guerra— han sido encabezadas en todos los países de Centroamérica por las organizaciones gremiales. Los partidos son útiles en momentos de elección. Pero cuando se trata de combatir una medida de reparto agrario o nuevos tributos, los partidos de la derecha retroceden y dejan el espacio a representantes mejor dotados por la fuerza de la organización y de la ideología que manejan para pelear con éxito: las Cámaras gremiales.

No es posible relatar la turbulencia desatada con ocasión de la reforma agraria, la nacionalización bancaria y del comercio exterior en El Salvador (1979-80) y el papel desempeñado básicamente por la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada); y para poner otro ejemplo, las batallas anti-fiscales (contra el paquete tributario recomendado por el FMI) libradas por el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) de Guatemala, para la Semana Santa de 1985. Con posterioridad, las contradicciones se han mantenido, enfrentando al Gobierno demócrata-cristiano. No es casual que la batalla que los partidos de la derecha perdían en el Congreso trataba el CACIF de ganarla en la calle, convocando a dos paros nacionales exitosos en 1986-87. Ejemplos testimoniales de la conducta abiertamente política del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) los ofrece reiteradamente la crisis nicaragüense en los últimos años. Aquí ocurre más bien una exacta división de tareas y no una sustitución como en los casos de Guatemala y El Salvador. También hay reparto de funciones realizadas con profundidad y talento en Costa Rica, donde las fuerzas conservadoras utilizan el Parlamento para unas cosas y los medios de comunicación que les pertenecen para otras. La Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) también cumple un papel político central. Contradictoriamente, siendo Honduras el país socialmente más atrasado de la región, tiene un sistema político más *aggiornado*. El sistema partidario funciona, pero admite en sus momentos de crisis la mediación del COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) y del movimiento sindical-campesino. Los últimos grandes acuerdos, con ocasión de la crisis interestatal, con Suazo Córdoba, en mayo de 1984, y luego el trámite para aceptar una modificación

electoral que permitiera la multirrepresentación partidaria, en octubre de 1985, fueron logrados porque las Fuerzas Armadas, el COHEP y los sindicatos concertaron un pacto que los partidos aceptaron de mal grado (2).

En síntesis, la crisis centroamericana también ha sido una crisis de los partidos políticos, que no desaparecieron en el vértigo de la lucha, sino que guardaron una prudente espera. Han sido abiertamente recompensados después de 1982-1984 cuando la estrategia contrainsurgente redefine el espacio en que la crisis se desarrolla y traslada al plano de la política lo que la situación de guerra ya no permite o no necesita por esos medios alcanzar. Llamó profundamente la atención la convocatoria a elecciones a Asamblea Constituyente en El Salvador en 1982, y dos años después, igual convocatoria para Guatemala. Las elecciones a Constituyente fueron seguidas en ambos países por elecciones presidenciales (1984 y 1986, respectivamente), en tanto la opinión internacional y otros factores internos vinculados a la crisis económica y a los compromisos realizados por el FSLN llevaron a realizar elecciones de diputados y presidenciales en Nicaragua en 1984 y en 1990. Los resultados de estas últimas constituyen una extraordinaria oportunidad para determinar las condiciones democráticas en una sociedad polarizada por la guerra, es decir, en que la liza de la violencia armada se transforma en una competencia electoral y parlamentaria, pero también por el control de las masas y de los recursos de la fuerza.

Todo ello ejemplifica acerca de una situación inédita: no es necesaria la pacificación total (como ausencia de guerra) para que en la estrategia contrainsurgente aparezca como necesario el recurso electoral. ¡Para derrotar a la revolución la política democrática! Es difícil imaginar, a contrapelo de las experiencias de los tres países mencionados, luchas democráticas paralelas y guerras civiles. Parecen obedecer a lógicas implacablemente opuestas.

Convencido Maquiavelo de que es igualmente importante querer ir al cielo como conquistar el poder en la tierra, no descartó el traslado de la guerra de la sociedad a la política para conquistar espacios de poder. Sabía que la violencia produce hondas conmociones sociales, a las que veía inevitables, a condición de sólo usarla una vez. Situado en esa perspectiva de la violencia, Maquiavelo no la disimuló, pero trató de disminuirla, en lo que Sheldon Wolin ha llamado la economía de la violencia. La política, como la economía de la violencia no pudo tener éxito en la contención del cauce revolucionario,

---

(2) Junto a las organizaciones gremiales existen, además, criaturas de la AID que las apoyan directamente, y tal es la función de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Empresarial (FIDE) en Honduras, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUSADES) de El Salvador, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y otras.

y en su lugar ha habido una combinación ambigua, confusa y a la postre trágica para las sociedades que la experimentan. Políticos y guerreros, combinando sus herramientas de control, repiten las experiencias del centauro Quirón —profesor de príncipes de remotos tiempos—, que, como preceptor medio hombre y medio bestia, les hacía saber la necesidad de recurrir a ambas naturalezas: las leyes y la fuerza, porque una sin la otra no es duradera (MAQUIAVELO, 1961: XVIII).

Son los preceptos de Quirón los que combinan las luchas en las que unos adversarios pueden perder, pero conservando el derecho a repetir su participación, en las que pueden ganar, junto a enemigos que, cuando no logran ganar, pierden la vida. No obstante, la simple verdad de esto, en ausencia de pacificación total se intenta ahora la democratización electoral como estrategia contrarrevolucionaria. Hay elecciones en todos los países, y en aquellos en que hay guerra popular, se producen dos hechos importantes a señalar: por un lado, aparece una derecha política con vigoroso apoyo popular; en El Salvador, con el 59 por 100 en 1982 y el 56 por 100 en 1984, en que no eligen presidente por ir separados; en Guatemala, el 72 por 100 en la Asamblea Constituyente y el 58 por 100 en la presidencial, y por el otro, una desesperada búsqueda a través de transacciones y componendas para asegurar una victoria centrista, para fortalecer fuerzas y partidos que estén en el centro del llano.

La situación es distinta en Costa Rica, donde el virtual bipartidismo y la tradición democrática otorgan a las fuerzas conservadoras una fuerte presencia electoral. De hecho, Costa Rica se mueve entre el sistema de «partido predominante» (Liberación Nacional ha ganado, de nueve elecciones, seis) y un bipartidismo monista.

La estrategia contrainsurgente, a la manera del Centauro Quirón, no quiere combatir sólo con las normas de las bestias, sino utilizando las leyes de los hombres. En este último empeño, el ideal es la reconstitución del centro político, destrozado por la violencia política y la guerra. Se busca implantar el «reino del pantano» (DUVERGER, 1969: 141), como llamaban en Francia a quienes no querían ser jacobinos izquierdistas o montañeses reaccionarios. El ideal del régimen es el que se ubica en el centro, en la «llanura» en el «pantano», como le llamaron los hombres del Tercer Estado, que demostraron la prudencia de la indefinición inmediata. Centroamérica intenta reconstruir su estructura de partidos bajo el imperio del pantano. La elección de los presidentes demócratas-cristianos deben ser consideradas como la decisión victoriosa de fortalecer el centro político. En otras experiencias, el centrismo aparece como el principal factor de la multiplicidad de partidos. En Honduras, las dos victorias electorales del Partido Liberal —en el seno de un bipartidismo

histórico que admite rajaduras internas— constituyen victorias del centro. La lección de otras sociedades donde el pantano domina empieza a ser aprendida: el centrismo favorece a la derecha. Las coaliciones del «justo medio» nunca se deslizan a la izquierda.

Pero vayamos al punto central. La existencia de la revolución nicaragüense no puede dejarse de lado, pues por sí misma redefine todo el proceso de transición que ocurre en la región, y la transición a la democracia no puede completarse sin considerar la que se produce en ese país. Hay aquí un rescate de la política al volcarla a las masas y organizarlas para que ejerciten en espacios totalmente inéditos. La dinámica de la revolución no puede ser ajena a la construcción de una sociedad democrática que forma parte de un proyecto histórico largamente alimentado. La victoria sandinista es la crítica de un modo de dominación y la construcción de otro a partir de una evidente intencionalidad utópica. Se calla reiteradamente, por lo demás, que el Congreso norteamericano, que aparece como adalid de la democracia en esta parte del mundo, discuta continuamente las formas más eficaces de intervención militar contra Nicaragua. Y que, con generosa dotación de dólares, apoyen gobiernos centristas y con igual celo se preocupen del retorno planteado a los cuarteles (CORAGGIO, 1987: 45).

#### IV. PARTIDOS Y PACTOS CORPORATIVOS

En esta coyuntura es conveniente recordar las ideas del Estado democrático y representativo, del Estado burgués. Cabe recordar, en consecuencia, que en la sociedad burguesa, la del Estado representativo, a la idea de soberanía popular corresponde una forma específica de constitución de esa soberanía, de expresión que fundamente lo representativo que el poder reclama. Es entonces que la «forma» partido aparece y cumple la mediación por excelencia entre el poder del Estado y la sociedad. En sus orígenes clásicos, el partido político surge como la organización socialista capaz de dirigir la movilización de las masas oprimidas. Es la respuesta (CERRONI, 1969: 9-11) obrera a la política burguesa; su constitución es un desafío al Estado, que rompe y unifica la división entre la sociedad política y sociedad civil. Justamente como resultado de esta disociación inevitable, la burguesía se apropia de estas mediaciones —que antes no necesitó— para convertirlas en nuevos instrumentos de control y hegemonía. Mediante la «forma» partido, el sistema intenta recuperar la profunda heterogeneidad social, a través de las instituciones políticas, de la mediación que iguala políticamente a los ciudadanos.

El partido, como ha quedado dicho, es la instancia adecuada para la me-

diación/representación de los intereses contradictorios, en conflicto, de las clases, incluyendo ahora a los de la clase dominante. Al organizarse en *partido*, las clases aceptan los términos de un juego institucional cuyas reglas y normas deben ser cumplidas como condición de la existencia democrática. Una vez dentro del juego, la democracia no puede ser rechazada. El sistema tolera y luego necesita de la participación obrera.

Este breve y tal vez obvio recuento nos sirve para señalar que en las condiciones de la actual etapa de desarrollo de la crisis la organización de la protesta y del descontento social ya puede establecerse (y controlarse) por intermedio de la vieja e inoperante estructura partidaria, que en los momentos de mayor peligro exhibieron impudicamente sus vergüenzas. Los partidos y las elecciones vuelven a ser funcionales al orden. La política intenta reconstituir su dignidad para moverse democráticamente en el centro del espectro. La transición que señalamos como un proyecto puede o no conducir a la democracia posible.

La tradición centroamericana de debilidad del Estado representativo y de la democracia liberal no van a mejorar fácilmente en las actuales condiciones de crisis económica y guerra. La organización partidaria no es suficiente para lograrlo. Son varios los enemigos que dificultan que el partido unifique las luchas sociales con las instituciones políticas y, en consecuencia, que trabajen juntos en una estrategia democrática como sustitución de la táctica de la guerra.

El *primero* de ellos, tal vez por ahora el menos importante, es la ausencia de partidos de izquierda, es decir, de proyectos de justicia social con cambios impulsados por sectores populares, por hoy marginados de la vida política. El *segundo enemigo*, más importante, lo constituye las fuerzas militares, porque todavía constituyen una alternativa poderosa, apoyadas en un Estado contrainsurgente, que no perdió sus facultades para las operaciones especiales ni para el control nacional o el poder de veto.

También es un *enemigo creciente* la tentación corporativa, que viene a ser una forma de interacción entre organizaciones de intereses patronales, vinculados a funciones especiales que se originan en la división interna del trabajo y con sectores del aparato estatal. Es la fuerza de los gremios empresariales incorporados a la función estatal, al margen y en detrimento del partido. Lo corporativo es un proceso de relacionamiento social y político entre organizaciones que asumen la representación de intereses *monopólicos* y el Estado. Son cada vez más poderosas y más frecuentes las prácticas neocorporativas en la región.

El problema en este aspecto es cómo combinar la lógica corporativa (que es representación monopólica) con las necesidades pluralistas. No se trata de

la representación parlamentaria, que es democrática. El corporativismo puede surgir desde el Estado o desde la sociedad. La idea es que no todo lo que se origina desde la sociedad es democrático. ¿A qué condujeron las políticas conservadoras de «fortalecer» la sociedad civil? Al aumento del poder empresarial y del mercado, al éxito del neoliberalismo, que desde la sociedad pone en jaque continuo al Estado, cada vez más debilitado (JESSOP, 1982).

Con lo corporativo se negocia todo: el conflicto y la ganancia. ¿Todos ganan? Hay un intercambio que no tiene nada de democrático. Es el regreso al mercado y a su lógica total. La democracia política y el juego de partidos tienen una función complementadora de las funciones esenciales, reproductoras del mercado, cuya libertad es la primera y la mayor. A ella deben someterse los diseños democráticos de la política. Así, el liberalismo es la desvalorización de la política porque traslada a la economía las decisiones estatales.

La sociedad parece ser el reino de la espontaneidad; los liberales la dejan sometida a la fuerza invisible, de esos que operan en el mercado. La política resulta superflua y las políticas de los partidos son sólo fermentos de desorden o actos superfluos ante la función ordenadora del mercado. La difusión de esta ideología, profundamente antidemocrática, tiene un éxito notable hoy día gracias al impulso de organismos creados por la AID, que respalda con vigor financiero e ideológico las organizaciones gremiales.

El último enemigo de la transición democrática y de los partidos lo constituye la política exterior norteamericana, decisiva e influyente entre sus viejos y nuevos aliados. El abandono de los aliados de la derecha puede ser provisional ante las dificultades que enfrentan los políticos del pantano. La crisis o da espacios suficientes frente a intentos de desvalorizar la política o sustituirla por la guerra. Al jugar a una política de doble vía, ambidiestra, los norteamericanos se aseguran mayor control y mejores posibilidades de éxito.

Todo este conjunto de consideraciones tiene un punto de resumen: por diversas razones, a cuales más contradictorias unas de otras, parece iniciarse una etapa de democratización por vía autoritaria. Es necesario empezar a ver la otra orilla para que el puente que se está tendiendo tenga base segura. Pero, además, para que sea útil y sepamos adónde conduce (3).

---

(3) Este texto fue escrito en 1988 y ha sido ligeramente modificado para incluir referencias muy breves a los cambios habidos en Nicaragua, sin ningún análisis correspondiente.

BIBLIOGRAFIA

- LECHNER, Norbert: *¿Qué significa hacer política?*, Lima, DESCO, 1982.
- VEGA, Juan Enrique: «Política y Estado: apuntes e hipótesis para una reflexión sobre sus interrelaciones», en *Teoría y política en América Latina*, México, CIDE, 1983.
- TORRES-RIVAS: *Centroamérica: La democracia posible*, San José, EDUCA, 1986.
- DELICH, Francisco: «Teoría y práctica política en situaciones de dictadura», en *¿Qué significa hacer política?*, Lima, DESCO, 1982.
- DE RIZ, Liliana: «Política y partidos políticos, un ejercicio comparado», en *Síntesis*, núm. 2, Madrid, mayo-agosto 1987.
- DUVERGER, Maurice: *La democracia sin el pueblo*, España, Ariel, 1967.
- LÓPEZ, Sinesio: *La política, la violencia y la revolución*, Lima, a mimeógrafo, 1987.
- WOODWARD JR., Ralph Lee: «Orígenes económicos y sociales de los partidos políticos guatemaltecos», en *Anuario de Estudios Sociales Centroamericanos*, núm. 1, Costa Rica, 1974.
- CORAGGIO, José Luis: «Asumir a Nicaragua...», en *David y Goliath*, año XVII, número 52, 1987.
- MAQUIAVELO, Nicolás: *El príncipe y escritos políticos*, Madrid, Aguilar, 1961.
- JESSOP, Bob: *The capitalist state, marxist theory and Method*, Oxford, Martin Rabson, 1982.
- CERRONI, Humberto, y otros: «Teoría marxista del partido político», en *Cuadernos de Pasado y Presente*, 7, Córdoba, 1969.